

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA TERCERA DE DECISION LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	JOSÉ ALBERTO ESTUPIÑÁN BUITRAGO
DEMANDADA	Triturados Procalin S.A.S. y Marceliano Naranjo Duque
PROCEDENCIA	Juzgado 13 Laboral del Circuito de Medellín
RADICADO	05001 3105 013 2016 000942 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro.264 de 2022
TEMAS Y SUBTEMAS	Relación laboral. Ineficacia transacción. Indemnización plena de perjuicios por accidente laboral. Indemnización PCLPP, salarios, prestaciones, vacaciones, indemnizaciones
DECISIÓN	Revoca y confirma

En la fecha, **primero (1º) de diciembre de dos mil veintidós (2022)**, la Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados: Martha Teresa Flórez Samudio, Orlando Antonio Gallo Isaza, y Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad demandada, contra la sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito, dentro del proceso ordinario promovido por **José Alberto Estupiñán Buitrago** contra **la sociedad Triturados Procalin S.A.S.** representada legalmente por su liquidador **Marceliano Naranjo Duque**, y contra este como persona natural, radicado único nacional 05001 3105 **013 2016 00942** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 del año en curso, sometió a consideración de los

restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado mediante acta **Nº 36**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación.

Antecedentes

Pretende el demandante, por conducto de su apoderado, se declare la existencia de relación de trabajo con **Triturados Procalín S.A.S.**, con extremos entre el **01 y el 30 de marzo de 2011, inclusive**, incumpliendo la empresa durante la vigencia de la misma y al momento de su finalización, con el pago de salarios, prestaciones, vacaciones y demás derechos, así como con la afiliación a seguridad social. Que estando al servicio de la pasiva, **sufrió un accidente de trabajo el 30 de marzo de 2011**, mediando en el mismo **culpa del empleador**. Que la **transacción suscrita** entre las partes se encuentra viciada **de nulidad absoluta por objeto ilícito**, al recaer sobre derechos ciertos, mínimos e indiscutibles del trabajador, o **subsidiariamente**, de nulidad relativa al haberse suscrito por la parte activa, inducido por error o por dolo proveniente de la sociedad Triturados Procalín S.A.S. **Como consecuencia**, pide el pago de salarios, prestaciones, auxilios y descaso durante la vigencia de la relación laboral, indemnización por terminación del contrato, indemnización artículo 65 del C. S. del T., desde el 01 de abril de 2011, indemnización por no pago de intereses a las cesantías (art. 5º Dto. 116 de 1976); cancelación de prestaciones económicas por omisión en la afiliación al sistema de seguridad social, las que están a cargo del empleador; indemnización total y ordinaria de perjuicios patrimoniales y extra patrimoniales consecuencia del accidente de trabajo, discriminados en lucro cesante, daño moral y daño a la vida de relación, los dos últimos debidamente cuantificados.

En sustento de ello afirma que, se vinculó laboralmente con el empleador **Triturados Procalín S.A.S. el 1º de marzo de 2011**, desempeñando la labor como operario de piedra y/o clasificador de piedra, auxiliando la operación de la zaranda vibradora clasificadora de piedra; su lugar habitual de trabajo lo fue la planta trituradora de piedra propiedad de la sociedad accionada, ubicada en el KM 1 Rio Claro – Doradal, Municipio de Puerto Triunfo; como remuneración por su actividad recibió el salario mínimo mensual vigente. **El 30 de marzo de 2011**, alrededor de las 9 am, estando en servicio, sufrió un **grave accidente**, en el área de clasificación y trituración de la piedra, resbaló y una de las zarandas de la maquina clasificadora de piedra le atrapó y machacó su brazo derecho – dominante- inhabilitándolo hasta el día de hoy, en forma permanente – por completo, no solo con secuelas físicas sino por trauma psicológico. Inicialmente fue trasladado con urgencia a la E.S.E. Hospital La Paz de Puerto Triunfo, donde le prestaron primeros auxilios para estabilizarlo y luego fue remitido a la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Rionegro, donde permaneció hospitalizado por espacio aproximado de mes y medio. Que para la fecha del accidente no tenía afiliación a seguridad social en pensiones, salud y riesgos laborales, y tampoco fue debidamente entrenado para el manejo y seguridad de la zaranda clasificadora de piedra que operaba el día del accidente, y no le fueron suministrados elementos de seguridad industrial adecuados para tal actividad. En el hecho **doce**, textualmente narra: *ora con desconocimiento, ora con la complicidad de autoridades estatales y personal médico adscrito a la ESE Hospital la Paz de Puerto Triunfo, Antioquia, se fingió, para no reportar el siniestro laboral, un accidente de tránsito involucrando el vehículo marca KIA con placas FGL753 para aprovecharse de la cobertura del SOAT. Lo cual quedó consignado en algunos documentos que se adjuntan como prueba documental.* Sobre el particular, el demandante, el **06 de agosto de 2014**, presentó denuncia penal para que se apliquen las sanciones, individualizando a los responsables del presunto ilícito. Que como consecuencia de las secuelas derivadas

del accidente se encuentra impedido para trabajar, pues tal como se demuestra con dictamen adjunto, presenta una PCL superior al 50%.

Que la empresa, aprovechando la ignorancia e ingenuidad del demandante, para relevarse de las obligaciones laborales, con vías de hecho y sin autorización del Ministerio del Trabajo, en los términos del artículo 26 de la Ley 361 de 1997, abusivamente confeccionó un contrato de transacción, sin ilustrarlo sobre su contenido y alcance para que el incauto José Alberto lo ratificara con su penosa e imperfecta firma, reflejando dificultades y poca destreza – el 06 de octubre de 2011, despojándosele de sus derechos laborales pues con ello se dio por terminado el vínculo laboral, encontrándose tal transacción viciada en su validez, cuando menos de nulidad absoluta por objeto ilícito y nulidad relativa por vicio del consentimiento del trabajador, ya que contiene cláusulas abusivas que versan sobre derechos mínimos e irrenunciables, y no se expresó por este de manera libre su consentimiento, sin que la empresa le haya reconocido y pagado las prestaciones sociales derivadas del contado de trabajo ni los emolumentos económicos del sistema de riegos laborales, ni la indemnización plena de perjuicios. Que efectuó reclamación de sus derechos a la empresa el **25 de marzo de 2014**. Al momento del accidente contaba con 44 años de edad, y con el mismo perdió una parte considerable de su capacidad laboral, encontrándose seriamente perjudicado, y causándosele perjuicios morales, a la vida de relación y a la salud.

Subsanados los defectos advertidos por el juzgado de conocimiento, **en auto del 08 de noviembre de 2016, se admitió** y ordenó dar trámite a la acción, debidamente enterada de la actuación la sociedad demandada, por medio de apoderado allegó contestación, explicando que el demandante se dedica a prestar servicios por días en diferentes actividades (**jornalero**) **y el 30 de marzo de 2011, debido a que**

uno de los trabajadores de la empresa no asistió a laborar, se le pidió al señor Estupiñán que les colaborara única y exclusivamente por ese día, para hacer un trabajo específico y a cambio, se le reconocían unos honorarios, que la labor que debía desempeñar no representaba ningún riesgo, *ya que simplemente debía vaciar piedras en una tolva, sin embargo, por razones que aún desconocen en la empresa, pero que según les ha comentado, obedeció a que el demandante se ausentó del sitio donde prestaba sus servicios para conversar con un empleado de la compañía que estaba cerca a la máquina en la cual se accidentó, resbaló y se causó lesiones graves en su codo,* la atención médica recibida en los Hospitales de Puerto Triunfo y Rionegro son ciertas y también la no afiliación al sistema de seguridad social, por no ostentar la calidad de trabajador. Y *como una medida desesperada pero naturalmente equivocada y para tratar de alivianar el tema de atención en salud del demandante, se decidió afiliarlo a la seguridad social aún a sabiendas de que no tenía la calidad de empleado, situación de la cual quiere sacar provecho el señor ESTUPIÑÁN.* Admite que no se le brindó ninguna capacitación al actor para realizar las labores en la máquina trituradora, porque nada debía estar haciendo en ese sitio **y además porque la contratación fue civil y para un solo día.** La denuncia penal es cierta y el demandante también está comprometido en el ilícito que puso en conocimiento de la Fiscalía. Si bien se allega dictamen particular que demuestra pérdida de capacidad laboral, la única entidad autorizada para tal valoración es la Junta Regional de Calificación de Invalidez. La reclamación de derechos formulada en el año 2014 es cierta y también la suscripción de transacción. Cancelándosele la suma de \$10.920198 por la totalidad de conceptos que reclama, **incluidos eventuales prestaciones sociales, salarios e indemnizaciones, las cuales son transables en su totalidad, de ahí que exista en este caso cosa juzgada.** Los demás supuestos no son ciertos; insiste en que no medió relación laboral con el demandante, sino contratación de carácter civil por un día, negando con sustento en ello **las pretensiones,** expuso los

fundamentos y razones de derecho y formuló las **excepciones** de prescripción, inexistencia de la obligación, compensación, pago y cosa juzgada.

En escrito del 12 de septiembre de 2017, el apoderado del demandante solicitó la integración por pasiva del señor **Marceliano Naranjo Duque**, como persona natural, al también suscribir este el contrato de transacción, a lo que se accedió mediante auto del 15 de septiembre de 2017, y debidamente notificado, dio contestación, por conducto del mismo apoderado y en idénticos términos a los de la empresa.

La primera instancia finalizó con **sentencia** proferida por el **Juzgado Trece Laboral del Circuito**, el 04 de octubre del año en curso, **declarando** la existencia de un contrato de trabajo entre el señor **José Alberto Estupiñán Buitrago y Triturados Procalín S.A.S. en liquidación**, por el día 30 de marzo de 2011; **condenó a la sociedad accionada**, a pagar al demandante salario por \$127.853; auxilio de transporte: \$2.120; cesantías \$1.664; intereses a las cesantías: \$0,5; prima de servicios \$1.644; vacaciones \$732; sanción por falta de pago de intereses a las cesantías \$1; indemnización moratoria del artículo 65 del C. S. del T., a razón de un día de salario \$17.853 desde el 1 de abril de 2011 hasta el día del pago de las prestaciones adeudados, ascendiendo para la fecha de la sentencia a **\$74.966.147**; indemnización por pérdida de capacidad permanente parcial **\$12.628.000** con la indexación pertinente desde la causación hasta la fecha del pago; **declaró configurada la excepción de cosa juzgada** en torno a la pretensión de declaratoria de culpa patronal en la ocurrencia del accidente padecido por el demandante, e indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del CST, al ser válida la transacción celebrada. Los demás medios exceptivos implícitamente

resueltos en forma negativa. Absolvió a Triturados Procalín SAS en liquidación de las demás pretensiones incoadas en su contra por el demandante, y de la totalidad de estas en contra de **Marceliano Naranjo Duque**. Impuso condena en costas a Triturados Procalín S.A.S. fijando el monto de las agencias en derecho en la suma de \$6.000.000,00.

Argumentó la falladora que si bien la tacha de falsedad planteada por el apoderado de los demandados frente a la declaración de la señora **María Estefanía Aguirre Jiménez**, fue extemporánea, sus dichos no merecieron credibilidad por las contradicciones en que incurrió con la prueba documental allegada; y la segunda declarante, señora **Rosa Angélica González**, es una testigo de oídas que nada directo le consta, pero al aceptarse en el escrito de contestación y diligencia de interrogatorio por el señor Marceliano Naranjo Duque, representante legal de Triturados Procalín S.A.S., la prestación personal del servicio por parte del demandante, el día **30 de marzo de 2011**, en actividades propias del objeto misional de la empresa, sin que se hubiese demostrado independencia o autonomía en la labor o que esta fuera especializada o extraña, estando sometido a órdenes a instrucciones impartidas por el encargado de la planta, para ese momento señor Alexander Naranjo Gómez, surgen indiscutibles los indicios de laboralidad, por lo menos durante esa fecha; **finalizando el contrato el 30 de marzo de 2011, presentándose reclamación el 25 de marzo de 2014 2 y la demanda el 25 de julio de 2016**, notificándose el auto admisorio tanto a la empresa como a la persona natural vinculada por pasiva dentro del término establecido por el artículo 94 del CGP, no tuvo operancia el fenómeno extintivo de la prescripción, por lo que impuso las correspondiente condenas, debidamente discriminadas como se vio, al no dar validez al dicho de la testigo **María Estefanía** cuando afirma su cancelación, por

exigir el **artículo 225 del CGP**, para la acreditación del pago de obligaciones originadas en contrato o convención, el correspondiente documento de pago, y efectuarse en la demanda negaciones indefinidas que invierten la carga de la prueba, considerando evidente la mala fe en la no cancelación oportuna de lo adeudado, máxime cuando se reportó como accidente de tránsito, para obtener la atención en salud requerida, por un hecho que en realidad corresponde a un accidente de trabajo, como se aceptó al efectuarse acta de transacción frente a las posibles indemnizaciones derivadas del mismo, llegando al convencimiento de ausencia de buena fe en el proceder de PROCALIN SAS, razón por la que se impuso condena por **indemnización moratoria** regulada en el artículo 65 del C. S. del T., y como el salario percibido lo fue el mínimo legal, se causa desde el día siguiente a la terminación del contrato hasta el día del pago.

Frente a los vicios que se endilgan al **acta de transacción**, para la falladora no quedaron estos acreditados, toda vez que el demandante confesó que el abogado **Hugo Zuluaga Jaramillo**, que también la suscribió, le explicó que una vez plasmara su firma no podría hacer reclamación posterior, sin que se avizore **nulidad absoluta por objeto ilícito**, porque recae sobre las eventuales indemnizaciones derivadas del accidente laboral, sin que se incluyeran derechos ciertos y discutibles, como se afirma; y tampoco **nulidad relativa**, por error inducido o por dolo proveniente de Triturados Procalín S.A.S., pues el trabajador fue consciente del hecho que originó el pago de la suma que le fue entregada, contando además con asesoría de dos abogados contratados para la correspondiente reclamación que luego le devolvieron la documentación, estimando **configurados los supuestos para afirmar cosa juzgada frente** a tal pretensión, como a la postre fue declarado.

Y finalmente, en lo relativo al pago de las prestaciones que hubiese cubierto el sistema integral de seguridad social, advirtió la juez que la vinculación al mismo se dio el **08 de abril de 2011, a la ARL Positiva y a Saludcoop**, y si bien con el escrito de demanda se allegó valoración de pérdida de capacidad laboral efectuada al señor **José Alberto Estupiñán** por el médico Carlos Andrés Gómez, **sin que se aceptara el desistimiento frente a la misma** efectuado por el apoderado demandante, al haber sido oportunamente incorporada y controvertida con nueva experticia, practicada por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, surge con nitidez que la arimada con el escrito de demanda no supera las exigencias del artículo 226 del C. G. del P., además de no coincidir sus conclusiones con la documentación allegada, en especial historia clínica, que siempre hace alusión a un **accidente de tránsito**, mientras que el profesional afirma que las dolencias son consecuencia de **un accidente de trabajo**, y tampoco darse aplicación al MUCI que corresponde, fijando una PCL de 53,86% estructurada el 26 de octubre de 2011, mientras que el practicado por la Facultad de Salud Pública, destaca las atenciones más relevantes de la historia clínica, determina los diagnósticos motivo de calificación (fractura epífisis superior de cúbito, fractura epífisis superior de radio y esguinces y fracturas del codo) todos de **origen común, accidente de tránsito, aplicando la baremación y valoración correspondiente a deficiencia, rol laboral y otras áreas ocupacionales, concluyendo en un porcentaje del 42,75%**, estado de la pérdida de capacidad laboral – **incapacidad permanente parcial**, fecha de estructuración **23 de enero de 2014**, evaluación ortopedia Hospital San Juan de Dios, donde se define que está en fase de secuelas. **Evento común**, enfermedad, **accidente. Observación** *paciente en la sexta década de la vida, laboró como clasificador de piedra, actualmente desempleado, quien sufrió un accidente de tránsito 30/03/2011, según lo registrado en la historia clínica y*

atendido por el SOAT, por luxofractura de codo derecho, ya en fase de secuelas con anquilosis en 90 grados.

Se explica en la providencia de primer grado, que si bien es cierto, se hace alusión a un **accidente de tránsito**, se faltó a la verdad al documentar el mismo, por lo que ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para la correspondiente investigación, **variando el origen de la pérdida de capacidad laboral, para catalogarla como PROFESIONAL y en esas condiciones**, concedió la indemnización tarifada en el artículo 7º de la Ley 776 de 2002, a cargo de la sociedad empleadora, liquidada sobre la base de un salario mínimo legal mensual vigente.

Finalmente gravó con costas a la parte vencida.

Frente a tal decisión se manifestó inconformidad por **el apoderado de la sociedad demandada**, específicamente en lo relativo a la condena por indemnización moratoria del artículo 65 del C. S. del T., argumentando que contrario a lo concluido, considera que en este caso no se demuestra la mala fe por parte de la empresa, en la medida en que es claro que a pesar de que no se hizo referencia en el acuerdo de transacción a lo relativo a las prestaciones sociales, estas son mínimas, por lo que mal pudiera interpretarse que omitió pagarlas el empleador como dedujo la juez, pues el pago realizado fue considerable, diez millones de pesos, por lo que mal haría en pensarse que quiso sustraerse de una obligación que supera por poco veinte mil pesos. Adicionalmente, respecto a la declaración o tacha de falsedad de la testigo esposa del demandante, lo que se debe tener como sospechoso es lo relativo a situaciones en que favorecería a su cónyuge, pero en lo que tiene que ver con la admisión de circunstancias que benefician a la contraparte no habría lugar a

desecharlo y claramente la testigo declaró que su esposo recibió de Triturados Procalín todos los conceptos relacionados con salarios y prestaciones que se reclaman y que dan origen a la indemnización moratoria, por lo que considera, demostrado tal pago y por tanto, improcedente la imposición de indemnización moratoria, a todas luces desproporcionada frente a los conceptos que finalmente se deben reconocer, peticionando revocar esta condena.

De la oportunidad para presentar alegaciones hizo uso **el apoderado judicial del demandante**, para expresar que considera justa la decisión por lo que solicita sea confirmada en su integridad, al quedar evidenciada la mala fe del accionado, al punto que se ordenó compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación, por lo que encuentra fundamento la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C. S. del T. y la por pérdida de capacidad permanente parcial, al no haber sido afiliado al sistema de seguridad social para el 30 de marzo de 2011, fecha del accidente de trabajo, que se hizo pasar como accidente de tránsito para defraudar a la compañía aseguradora, y como si no fuera suficiente, la sociedad demandada se liquidó sin aprovisionar contable ni financieramente esta contingencia judicial, pues no se reservó el dinero para el pago de una eventual condena, debiéndose valorar en su integridad su conducta, como se explica en sentencia del 13 de abril de 2005, radicado 24397 y en la 6658 del 15 de julio de 1994, precedente aplicado por la a quo, insistiendo en la confirmación de lo decidido.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones

La Sala centrará su estudio en el punto objeto de recurso de alzada, al tenor de la directriz que para estos efectos traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, por lo que **el problema jurídico en esta instancia** queda circunscrito, en forma exclusiva, a determinar si procede o no la condena por la indemnización moratoria establecida en el artículo 65 del C. S. del T.

Sobre el particular, pertinente resulta indicar que la tesis actual de la jurisprudencia especializada, contenida entre otras, en sentencias SL 2175-2022, explica:

Es un tema pacífico el hecho de que en tratándose de indemnización moratoria, la buena fe, equivale a obrar con lealtad, con rectitud y de manera honesta, es decir, se traduce en la conciencia sincera, con sentimiento suficiente de lealtad y honradez del empleador frente a su trabajador, de que en ningún momento ha querido atropellar sus derechos; lo cual está en contraposición con el obrar de mala fe, de quien pretende obtener ventajas o beneficios sin probidad o pulcritud (CSJ SL 691 de 2013).

Y es que la indemnización moratoria obedece a una sanción por el no pago de salarios y prestaciones sociales y no constituye una respuesta judicial automática frente al hecho objetivo de que el empleador, al finiquitar el contrato de trabajo, deje de cancelar al trabajador los salarios y prestaciones sociales adeudados o liquide indebidamente, de ahí que la misma encuentre lugar cuando quiera que, en el marco del proceso, el empleador no aporte razones serias y atendibles de su conducta, en la medida que razonablemente lo hubiere llevado al convencimiento de que nada adeudaba por salarios o derechos sociales, lo cual de acreditarse conlleva a ubicar el actuar del obligado en el terreno de la buena fe, y en este caso no procedería la sanción prevista en los preceptos legales referidos (CSJ SL3288-2021, reiterada en CSJ SL5290-2021).

En esa línea de pensamiento la indemnización moratoria constituye una pretensión autónoma, comporta una condena adicional a las requeridas que si bien se deriva del no pago de prestaciones sociales, no se encuentra implícita en ellas y, por el contrario, requiere de una valoración jurídica y probatoria por parte del juez. No es inescindible ni consustancial, al pago de prestaciones sociales, como tampoco opera de manera automática frente a la indebida liquidación (CSJ SL3288-2021, reiterada en CSJ SL 5290-2021).
Negrillas intencionales.

La a quo fundamentó la condena cuestionada en su convencimiento de ausencia de buena fe en el proceder de PROCALIN S.A.S., al negar la relación laboral a pesar de aceptar la prestación personal del servicio **el día 30 de marzo de 2011**, laborando en sus instalaciones en la clasificación de piedras en una tolva, insistiendo que se estuvo en un contexto civil, lo que resulta inaceptable al confesarse por el representante legal el acatamiento de órdenes del encargado de la planta, sin que tuviera independencia en su actividad, ni se esté ante una profesión liberal o suponga un conocimiento especializado, sin mostrar la empleadora voluntad en el cumplimiento de las obligaciones laborales, afirmándose y simulándose un accidente de tránsito para encubrir lo que en realidad fue un accidente laboral, admitiéndose este en el acta de transacción y en el escrito de contestación.

Y al restarle total credibilidad a la versión de la señora **María Estefanía Aguirre Jiménez**, por haber incurrido en varias **contradicciones**, tampoco le dio validez lo expuesto en cuanto al **pago oportuno de salarios y prestaciones**, tal como se advierte del audio contentivo de la audiencia de pruebas, **1: 44 : 35: P/ cuanto le pagaban a su esposo José Alberto por el trabajo en Triturados Procalín? R/ el mínimo. P/ cada cuando le pagaban? R/ cada 15 días. P/ Sabe si a José Alberto le quedaron debiendo salarios? R/ no señora. P/ no le quedaron debiendo o no sabe? R/ No, no le quedaron debiendo. P/ cuando terminó el contrato de José Alberto con Triturados Procalín? R/ pues cuando se accidentó. P/ en ese momento a él le pagaron liquidación? R/ pues a los dos meses de él haber salido del hospital, doña Diana fue y arregló con él y prácticamente conmigo de lo que ellos se habían gastado con nosotros, porque todo lo que ellos nos colaboraron eso nos lo cobraron, hasta una cobija, un saco que me llevaron, comida todo eso nos lo cobraron en el sueldo que le estaban pagando, entonces ahí arreglamos y ya. P/ y en ese arreglo dos meses después del accidente usted recuerda cuánto dinero fue el arreglo, como fue la cosa. R/ pues a él le pagaban los dos meses de trabajo**

que le salían a deber. p/ entonces que le deben a José Alberto. Que le debe esta empresa Triturados a José Alberto? **R/ no, pues que le respondan por el accidente del brazo,** porque él quedó prácticamente que en ninguna parte le dan trabajo y él que se va a poner a hacer.

Y si bien es cierto el artículo 225 del C. G. del P., reza:

La prueba de testigos no podrá suplir el escrito que la ley exija como solemnidad para la existencia o validez de un acto o contrato.

Cuando se trate de probar obligaciones originadas en contrato o convención, o el correspondiente pago, la falta de documento o de un principio de prueba escrito, se apreciará por el juez como un indicio grave de la existencia del respectivo acto, a menos que por las circunstancias en que tuvo lugar haya sido imposible obtenerlo, o que su valor y la calidad de las partes justifiquen tal omisión.

También lo es que los artículos 51 y 61 del C. P. T. y de la S.S. prevén:

Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley...

y

El juez no estará sujeto a tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantian actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio.

En todo caso, en la parte motiva de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.

Sin que se exija tarifa legal para demostrar el pago de salarios y prestaciones como se afirma por la a quo, pues aunque la documental sería la prueba ideal, **no es posible desatender los restantes medios de convicción,** siendo plenamente valida la testimonial, **incluso la confesión cuando se da,** luego aceptando la testigo, como cónyuge del demandante, **la cancelación oportuna de salarios, y el posterior arreglo por las prestaciones, al igual que la suscripción de acta de transacción por los perjuicios derivados del accidente, documento este último que también**

rubricó, tales dichos tienen plena validez, quedando así carente de sustento la condena a salarios y prestaciones, y si en gracia de discusión se dijera que lo adeudado son únicamente las prestaciones sociales, ha sido criterio de esta sala de decisión exonerar de sanción moratoria cuando los montos adeudados son mínimos, (ascenderían en total a \$6.181,00 y se pagó indemnización de perjuicios por accidente por valor de \$10.000.000,00), ello con fundamento en sentencias SL 11663 del 12 de octubre de 1999, reiterada en la 26948 del 09 de agosto de 2006, 24397 del 13 de abril de 2005, 27959 del 23 de marzo de 2007 y 35756 del 08 de julio de 2009 entre otras, en las que explica:

Y aun cuando la jurisprudencia tiene dicho que la cuantía de lo que el empleador adeude al terminar el contrato de trabajo a su trabajador no incide en la imposición de la sanción por mora, ello no significa que en casos como el presente no pueda concluirse que el bajo monto de lo que se le haya dejado de pagar al trabajador, frente a lo que se le reconoció efectivamente por conceptos de salarios y prestaciones sociales sea demostrativo de la intención del empleador que no fue la de, malintencionadamente y sin razones valederas y atendibles evadir su pago.

Pero al haberse impugnado solo **la indemnización moratoria**, únicamente se **revocará la decisión en este apartado**, manteniéndose incólume las demás condenas.

Y en relación con las costas, **tendrá en cuenta la a quo, en la etapa procesal pertinente, artículo 366 – 5, la modificación hecha a su decisión, para efectos de su tasación.**

Sin costas en esta instancia al prosperar la alzada.

En mérito de lo expuesto, la **Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **revoca** la

sentencia proferida por el **Juzgado Trece Laboral del Circuito** de Medellín, dentro del proceso ordinario promovido por **José Alberto Estupiñán Buitrago** contra **la sociedad Triturados Procalín S.A.S.** representada legalmente por su liquidador **Marceliano Naranjo Duque**, y contra este como persona natural, en cuanto impuso **condena por indemnización moratoria del artículo 65 del C. S. del T. a la sociedad Procalín S.A.S., circunstancia que deberá tenerse en cuenta en la oportunidad para liquidación de costas** (art. 366-5 del C. G. del P.). **En lo demás confirma.**

Ante la prosperidad del recurso interpuesto, no hay lugar a condena en costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijará por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en Auto AL2550-2021.

Los magistrados (firmas escaneadas)


LUZ AMPARO GÓMEZ ABISTIZABAL
Magistrada


MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO
Magistrada


ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA
Magistrado